



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto de creación del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

## I

Tal y como aclara su rúbrica, el Proyecto sometido a informe tiene por objeto la creación del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, regulado por el artículo 44 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, a cuyo efecto, el Proyecto regula los principios y competencias del Comité, así como la composición y funciones de cada uno de los órganos que lo integran.

El artículo 44.2 de la Ley 18/2011 detalla las funciones esenciales del citado Comité, delimitando las siguientes:

a) Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por la Administración de Justicia.

b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica, respetando en todo caso las competencias autonómicas atinentes a los medios materiales de la Administración de Justicia.

c) Promover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración de Justicia para suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13



de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales.

d) Aquellas otras que legalmente se determinen

Como se aprecia, la propia Ley establece como una de las finalidades principales de la actividad del Comité la garantía del respeto en las plataformas, herramientas y utilidades facilitadas a los órganos jurisdiccionales el respeto a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de carácter personal, a las que se remite expresamente el artículo 44.2 c) de la Ley 18/2011.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 4.2 g) de la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos “A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales”. Igualmente, el artículo 6.2 e) reconoce el derecho de los profesionales de la justicia “A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales”.

## II

Por otra parte, es preciso plantear la cuestión relacionada con las competencias en relación con el ejercicio de las actividades de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones y garantías derivadas de la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo por parte de los órganos jurisdiccionales, a partir de la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2011, en que se estimó el recurso de casación interpuesto por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de A Coruña contra sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba la sanción impuesta a dicho órgano jurisdiccional por esta Agencia, cuyo fundamento de derecho tercero señala lo siguiente:

*“La Ley Orgánica del Poder Judicial dedica fundamentalmente un precepto a la protección de datos de carácter personal. Se trata del art. 230, ubicado en el Título III (“De las actuaciones judiciales”) del Libro III, que habilita en su apartado primero a Juzgados y Tribunales a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con sujeción a la normativa de protección de datos. En dicho precepto se establece además el deber de salvaguardar en todo momento la*



*confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los ficheros judiciales. Estos deberes jurídicos, cuyos principales destinatarios son los propios Jueces y Magistrados, resultan obligados desde el reconocimiento de la protección de datos personales como derecho fundamental de la persona en la STC 292/2000 e inciden en la actuación de los Tribunales de muy diversas maneras, máxime si se tiene en cuenta que la legislación española y europea en general contiene una amplísima definición de lo que se entiende por dato personal (cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables). En definitiva, los datos de carácter personal forman parte consustancial de la actividad jurisdiccional, sirven de base para el funcionamiento de determinados ficheros judiciales y otros registros públicos de uso judicial y permiten llevar a cabo diligencias fundamentales para la investigación criminal, lo que plantea situaciones especialmente complejas, dado que pueden verse afectados otros derechos fundamentales, como sucede por ejemplo, en el acceso a los datos de tráfico en las comunicaciones electrónicas, a ficheros policiales o a la historia clínica. En todos estos supuestos, las posibilidades de actuación judicial en relación con los datos personales son ciertamente amplias, de ahí que tenga especial sentido el mandato de confidencialidad, privacidad y seguridad contenido en el art. 230 LOPJ.*

*Pero este precepto orgánico no se limita a ser simple recordatorio de los principios que deben regir la actividad de Jueces y Magistrados en virtud del derecho fundamental a la protección de datos. Hace algo más, apodera al Consejo General del Poder Judicial para dictar un Reglamento en el que se determinarán los requisitos y demás condiciones que afectan al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Este apoderamiento aparece además reiterado en el art. 107.10, inciso segundo, de la LOPJ, con la finalidad de asegurar también el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales en la elaboración de libros electrónicos de sentencias, recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso. Serán estas normas jurídicas reglamentarias dictadas por el CGPJ en virtud de los apoderamientos contenidos en el art. 230 y 107.10 de la LOPJ las que modularán y adaptarán el sistema de protección al ámbito judicial, introduciendo mecanismos de garantía específicos y fijando la extensión y límites de los derechos propios de este sistema jurídico -acceso, rectificación, cancelación, etc...- que la legislación general (LOPD) reconoce a los afectados, es decir a todas aquellas persona físicas que sean titulares de los datos que sean objeto de tratamiento en el ámbito de la Administración de Justicia. Es pues el Consejo General del Poder*



*Judicial al que la LOPJ encarga de la función tuitiva en esta materia no solo por razón del apoderamiento reglamentario al que el art. 230 hace referencia, sino también por tener atribuidas con carácter exclusivo las potestades precisas para el necesario control de la observancia de derechos y garantías, pues solo al órgano de gobierno judicial corresponde la inspección de Juzgados y Tribunales (art. 107.3 LOPJ).*

*Además, en línea con lo que estamos exponiendo, el contenido del art. 230 cobra pleno sentido si tenemos en cuenta que cuando fue incorporado el precepto en su redacción actual a la LOPJ por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, la norma que estaba vigente en materia de protección de datos era la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. (vigente hasta el 14 de enero de 2000), norma que excluía directamente en su Disposición Adicional Primera la aplicación de los Títulos dedicados a la Agencia de Protección de Datos y a las Infracciones y Sanciones respecto de los ficheros automatizados de los que eran titulares las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, exclusión que se justificaba no solo en el hecho de que se trate de órganos constitucionales diferenciados del Gobierno y de la Administración sino también porque, como poderes del Estado, gozan de una garantía constitucional de independencia respecto del poder ejecutivo, poder público en el que, como ya dijimos, se enmarca orgánica y funcionalmente la Agencia Española de Protección de Datos, aunque lo sea con un estatuto de independencia de su Director respecto del Gobierno. Además, por lo que se refiere en concreto al Consejo General del Poder Judicial y a su ámbito de gobierno, la exclusión del poder de decisión de la Agencia se justificaba entonces -y ahora- por una razón añadida a la ya expuesta, aunque nada se diga en la vigente LOPD, y es que tiene singularmente reconocida la función tutelar en materia de protección de datos de carácter personal en relación con los ficheros judiciales por formar parte de su ámbito de gobierno interno, función que se justifica en la necesidad de preservar los principios de unidad e independencia de la organización judicial a que se refiere el art. 104 de la LOPJ y que impide cualquier tipo de intromisión o injerencia por parte de una autoridad administrativa.*

*La existencia de estas limitaciones a las potestades de la Agencia Española de Protección de Datos por razón de la específica naturaleza de órgano susceptible de supervisión no es incompatible con el sistema europeo de protección recogido en la Directiva 95/46/CE, del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, pues ninguno de sus preceptos obliga a la existencia en cada Estado miembro de una sola Autoridad de Control que monopolice o concentre esta función, encargándose la*



*propia LOPD, que transpone la Directiva, de desmentir todo pretendido monopolio de la Agencia al prever en su texto (art. 41) la coexistencia de varias de ellas en territorio nacional (la estatal y las autonómicas) para supervisar a las propias Administraciones Públicas.*

*Sirva de complemento argumental a lo que llevamos dicho hasta ahora el propio sistema europeo de supervisión en materia de protección de datos de carácter personal en las instituciones comunitarias. El Reglamento (CE) nº 45/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Supervisor Europeo de Protección de Datos, al regular sus funciones, establece en el art. 46 que le corresponde supervisar y asegurar la aplicación del Reglamento y de cualquier otro acto comunitario relacionado con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de una institución u organismo comunitario, con excepción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando actúe en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.*

*El propio Consejo General del Poder Judicial, con posterioridad a la LOPD, ha ratificado su competencia en esta materia en virtud del apoderamiento del art. 230 LOPJ al aprobar el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales. Este Reglamento dedica su Título V, en desarrollo del art. 230 de la LOPJ, a regular el establecimiento y gestión de los ficheros automatizados bajo responsabilidad de los órganos judiciales, comprendiendo tanto los ficheros de datos automatizados de carácter personal dependientes de los Juzgados y Tribunales como los del Consejo General del Poder Judicial, e incluyendo también en su ámbito tanto los ficheros jurisdiccionales (aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de actuaciones jurisdiccionales), como los ficheros no jurisdiccionales o gubernativos (aquellos que incorporan datos de carácter personal que deriven de los procedimientos gubernativos así como los que, con arreglo a las normas administrativas aplicables, sean definitorios de la relación funcional o laboral de las personas destinadas en tales órganos y de las situaciones e incidencias que en ella acontezcan) y a todos ellos sitúa bajo el control del Consejo General del Poder Judicial con sujeción a un régimen específico de tutela ante los órganos de gobierno interno, mediante la articulación del correspondiente sistema de reclamaciones y recursos, en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Régimen de protección del que es ajeno la Agencia Española de Protección de Datos, a la que no se reconoce facultades de intervención, correspondiendo éstas a los órganos de gobierno judicial."*

De lo señalado en la citada sentencia se desprende que esta Agencia carece de competencia para la inspección y supervisión de los ficheros judiciales, si bien la misma no excluye el control que la Agencia ha de ejercer



sobre la actuación de las Administraciones Públicas competentes para dotar a aquellos órganos de los medios y condiciones que resulten necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de la legislación de protección de datos. Del mismo modo, es preciso clarificar que **la delimitación efectuada por la citada sentencia se refiere a las potestades de inspección y supervisión, pero en nada afecta a la función esencial de esta Agencia de velar, con carácter general, por el cumplimiento de las garantías y principio de la legislación de protección de datos ni tampoco el de emitir su parecer en relación con los Proyectos normativos o decisiones que puedan afectar a la delimitación o aplicación de esos principios y garantías, entre las que se encuentra, precisamente, la potestad de informar preceptivamente cuantos Proyectos normativos afecten al derecho fundamental de protección de datos, facultad en cuyo ejercicio, precisamente, se emite el presente informe.**

### III

Como se señaló en un lugar anterior de este informe, el respeto a las garantías y derechos de los afectados consagrado en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo deviene en la Ley 18/2011 un principio esencial que ha de regir la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la administración de justicia y en sus relaciones con las restantes Administraciones Públicas.

En este sentido, el Proyecto sometido a informe será aplicable, conforme a su artículo 2, “al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 18/2011”, que establece que “La presente Ley será de aplicación a la Administración de Justicia, a los ciudadanos en sus relaciones con ella Ley uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y a los profesionales que actúen en su ámbito, así como a las relaciones entre aquella y el resto de Administraciones y organismos públicos”.

De este modo, **sería necesario que, atendidos los derechos reconocidos por la Ley a los ciudadanos y a los profesionales de la justicia, se incluyera entre las funciones propias del Comité la adopción de medidas que garanticen que el tratamiento llevado a cabo en el marco de las decisiones que se adopten resulte respetuosos con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, con expresa referencia a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las exigencias de seguridad exigidas por el artículo 9 de la Ley Orgánica y el Título VIII de su Reglamento de desarrollo.**

Del mismo modo, y sin perjuicio de lo que se ha indicado en un lugar anterior en relación con las competencias de inspección y sanción de esta Agencia, pero manteniéndose intactas las potestades de asesoramiento e informe en cuanto afecta a la protección de datos, **esta Agencia considera que debería introducirse en el Proyecto una previsión que garantizase un**



**marco de estrecha cooperación entre el Comité creado por el mismo y esta Agencia Española de Protección de Datos, a fin de garantizar adecuadamente el cumplimiento de las normas de protección de datos en el ejercicio de las competencias atribuidas al Comité.**

#### IV

Por otra parte, debe hacerse especial referencia a la necesaria garantía de la interoperabilidad entre los distintos sistemas a la que reiteradamente, como no puede ser de otro modo, se refiere el Proyecto sometido a informe.

La citada interoperabilidad no sólo resulta imprescindible para el adecuado cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley 18/2011 y para la garantía de los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración de Justicia, sino que además es fundamental para asegurar la integridad y exactitud de la información contenida en los expedientes judiciales, dándose así cumplimiento a las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, particularmente en lo relativo a los principios de calidad de datos establecidos por su artículo 4 y las obligaciones de seguridad y secreto previstas en sus artículos 9 y 10.

El artículo 24.1 de la Ley 18/2011 dispone que “Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones con competencias en materia de justicia, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente artículo”. Por su parte, el Capítulo II de su Título V regula el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, disponiendo el artículo 47.3 que en la elaboración del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad “se tendrá en cuenta lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, así como las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones competentes en materia de justicia y los servicios electrónicos e infraestructuras ya existentes. A estos efectos utilizarán preferentemente estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, considerarán el uso de estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos”.

Siendo la interoperabilidad una pieza esencial del sistema establecido por la Ley 18/2011 sería necesario que la misma quedase garantizada no sólo en el ámbito de la actuación judicial, sino en la vinculación que la misma ha de mantener con las Administraciones Públicas, dado que sólo de este modo podrá quedar asegurado un adecuado desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito judicial, esencialmente en el orden contencioso-administrativo, pero también en los restantes órdenes jurisdiccionales, incidiendo además en el adecuado cumplimiento por las Administraciones Públicas de los principios consagrados por la Ley 11/2007, de

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en caso de que la actuación administrativa sea objeto de impugnación ante los órganos jurisdiccionales.

El artículo 5, al definir las competencias del Comité se refiere en el apartado a) a la de “favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por la Administración de Justicia. A su vez en el apartado c) se refiere a la competencia consistente en “promover la cooperación de otras Administraciones Públicas con la Administración de Justicia para suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y en las leyes procesales”.

No pudiendo existir reproche alguno a tales previsiones debe no obstante plantearse si no resultaría conveniente reforzar la necesaria interoperabilidad entre los sistemas sometidos a la Ley 11/2007 y los regidos por la Ley 18/2011, lo que por otra parte parece derivarse de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la segunda de las normas citadas, al que ya se ha hecho referencia.

Por este motivo, esta Agencia considera conveniente **que se incidiese especialmente en el Proyecto en la necesidad de favorecer y garantizar una adecuada interoperabilidad de ambos sistemas, no limitando dicha referencia a los supuestos citados en el artículo 5 c).**